



FIGHTING GLOBAL POVERTY

Alimentando el Miedo:

**El costo humano de los
biocombustibles en Colombia**

Prefacio

La violencia y abuso a los derechos humanos han incrementado en la región colombiana del Pacífico suroeste en los últimos años. En Buenaventura durante el año 2007 se ha reportado el asesinato de cientos de personas, principalmente jóvenes afro-colombianos, en las luchas sostenidas entre paramilitares, las guerrillas y las fuerzas armadas; en Nariño, en el extremo sur de Colombia que bordea el Ecuador, unas 7,000 personas han sido forzadas a huir de sus hogares.¹

La situación en la ciudad de Buenaventura es de especial consideración. Allí se encuentra uno de los puertos con mayor actividad en Colombia y es domicilio de Palenque el Congal, contraparte de War on Want (en adelante referido como Palenque). Palenque es una organización de colombianos de descendencia africana cuyo trabajo es proteger a sus comunidades de la amenaza de desplazamiento, a través de actividades que los ayuden a crear conciencia sobre los derechos humanos.

Este reporte ha sido elaborado con base en información producida por Palenque y complementada por la investigación realizada por War on Want. En él se considera el papel que guerrillas, paramilitares e instituciones estatales juegan en el continuo desplazamiento que afecta a las comunidades afrocolombianas y a su rol en las múltiples infracciones de sus derechos humanos.

El reporte se centra en la más reciente y menos estudiada causa de desplazamiento: la producción de biocombustibles, especialmente del aceite de palma, a expensas de los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas de la región del Pacífico suroeste.

Las confiscaciones de tierras debidas a los cultivos de biocombustibles que tienen lugar en Colombia no están aisladas de otros sucesos. Ellas están conectadas directamente con la demanda global de “alternativas verdes” al petróleo y a la reducción de las emisiones de carbón que dañan el medioambiente. La demanda global de aceite de palma se ha duplicado en la última década, aumentando la preocupación sobre el impacto que tiene la producción de biocombustibles en el precio de los alimentos a nivel mundial.² Más desconocido es el hecho que la revolución de los biocombustibles presenta una amenaza para la seguridad de las comunidades vulnerables en lugares como Colombia.

El gobierno del Reino Unido tiene una historia de apoyo a las campañas militares para derrocar a las fuerzas de la guerrilla y ha sido acusado de ignorar los abusos a los derechos humanos en contra de los civiles.³ Como la demanda por aceite de palma y otros

biocombustibles aumenta, ahora es el momento de cuestionar el papel que desempeñan el gobierno del Reino Unido y otros inversionistas en la propagación de más violencia y derramamientos de sangre en contra de las comunidades afrocolombianas, cuyos derechos a la tierra y a la seguridad están cada vez más amenazados como resultado de la revolución de los biocombustibles.

Sue Branford

Presidenta, War on Want

Afrocolombianos bajo fuego

Los colombianos de descendencia africana y las comunidades indígenas representan aproximadamente la cuarta parte de los 40 millones de personas que totalizan la población colombiana*. Más del 80% de los afrocolombianos viven en extrema pobreza. Ellos representan más del 75% de los pobres y ganan la tercera parte de lo que ganan sus coterráneos no-negros. El fracaso del gobierno en reconocer las dificultades enfrentadas por esta comunidad ha originado servicios de baja calidad y escasez de inversión social en áreas habitadas por afrocolombianos, perpetuando de este modo la pobreza y desigualdad. Los afrocolombianos están concentrados principalmente en las regiones del Pacífico sur y suroeste del país. En Buenaventura, el 98% de la población es afrocolombiana.

Las comunidades urbanas y rurales afrocolombianas tienen los más bajos indicadores sociales y económicos del país. Un 60% no tiene acceso a asistencia médica básica y la tasa de analfabetismo en algunas regiones llega hasta un 45%. En el año 2005 se estimó la expectativa de vida para los afrocolombianos en 55 años, comparada con el promedio nacional de 64 años.⁴

Las violaciones a los derechos humanos en contra de esta comunidad son perpetradas a gran escala por paramilitares y guerrillas. El ejército colombiano y la policía han estado también involucrados. En la región del Pacífico, la confrontación entre paramilitares y los grupos guerrilleros comenzaron en 1998. Estos conflictos provocaron los primeros desplazamientos masivos. En los años que siguieron, el conflicto se extendió al área urbana y a los alrededores de Buenaventura. Hoy en día, crímenes violentos y violaciones a los derechos humanos son perpetrados diariamente contra los residentes de Buenaventura. Palenque del Congal, contraparte de War on Want, observa que hacia noviembre del año 2007 ya habían ocurrido 477 muertes violentas en esa localidad.⁵

Existen entre 3,000 y 9,000 grupos armados operando en Colombia. Desde los noventas, grupos paramilitares creados por militares locales, miembros de las élites políticas y económicas, jefes del crimen organizado y el tráfico de drogas, han ejercido una influencia significativa en el desarrollo económico y político de Colombia, así como también han desempeñado un papel central en la represión de las fuerzas de la guerrilla. Aunque los

* Los afrocolombianos, también conocidos como afrodescendientes, y las comunidades indígenas son los grupos principalmente afectados por los abusos a los derechos humanos y prácticas discriminatorias en el suroeste de Colombia. Este reporte se centra principalmente en las comunidades afrocolombianas de esta región, aunque grupos indígenas son también afectados, particularmente en el departamento del Valle del Cauca donde Palenque, socio de War on Want, trabaja.

grupos paramilitares, tales como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron originalmente presentados como fuerzas contrainsurgentes luchando en contra de la guerrilla, hacia el final de la década de los noventa ha quedado claro que muchas de sus actividades envolvían contrabando de drogas, extorsión a negocios y autoridades locales y apropiación ilegal de tierras con el fin de abrirle camino a la producción de coca. La complicidad entre las fuerzas del gobierno y los grupos paramilitares que dirigían la mayoría de los asesinatos y violaciones a los derechos humanos está bien establecida.⁶

Durante décadas, grupos de guerrilla tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han estado disputándose el gobierno y han sido responsables de numerosos abusos a los derechos humanos de la población colombiana. En las regiones del litoral sur, el ELN ha trabajado con los rebeldes de las FARC en la lucha contra los paramilitares con el propósito de retener el control de las plantaciones de coca y el comercio de drogas.⁷

En Nariño, la guerrilla y las fuerzas paramilitares han sido responsabilizadas tanto por la continua violencia y asesinatos de civiles, como por la lucha en la toma de control del tráfico de drogas y de algunos territorios en particular.⁸

En Buenaventura, las milicias FARC han tomado violentamente el control de los vecindarios que inicialmente eran controlados por los paramilitares. Al igual que los paramilitares, las milicias FARC fuerzan a la población local a pagar 'impuestos'. A finales del año 2006 se informó que las FARC habían cometido seis ejecuciones selectivas en el Valle del Cauca, a lo largo de los ríos Yurumanguí, Naya, y Mayorquín. También operaciones de combate han tenido lugar entre las guerrillas de las FARC y el ELN. Las guerrillas atacan posiciones militares en medio de las comunidades civiles, aterrorizando a los civiles residentes atrapados en el fuego cruzado. En respuesta a los ataques de la guerrilla, el ejército emprende ataque aéreo, disparando indiscriminadamente a las comunidades civiles y a los miembros de la guerrilla, aterrorizando aun más a la población y dañando sus propiedades.

Estos sucesos han causado restricciones a la distribución de alimentos y al movimiento de los residentes de Buenaventura, y ha conducido al desplazamiento interno de unas 6,820 personas en el año 2007.⁹

El papel de la policía como fuerza protectora no inspira confianza entre la población colombiana. Atropellos seguidos de fugas, abusos y acciones ilegales son sucesos comunes cometidos por la policía, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y la DIJIN

(Dirección de Investigación Criminal). En esta región también existe un racismo institucional endémico hacia los afrocolombianos.

La organización Palenque ha señalado las siguientes prácticas discriminatorias por parte de las fuerzas de seguridad:

- el uso ilegal de edificios públicos, escuelas y puestos de salud
- presencia armada intimidatoria en las asambleas comunitarias en zonas urbanas y rurales
- confiscación de botes y equipos de pesca, forzando a los pescadores a pagar multas para recuperarlos
- arrestos arbitrarios justificados por falsas acusaciones de ayudar a las guerrillas
- aumento de la inseguridad y de las restricciones al movimiento de comunidades atrapadas en el fuego cruzado entre los grupos armados.¹⁰

La prisa por los biocombustibles

El presidente de Colombia, Avaro Uribe, anunció el 7 de agosto del 2007, al comienzo de su segundo período presidencial, que la producción de biocombustibles sería una de las prioridades en su gestión. La industria de biocombustibles está fomentando el cultivo de cosechas, tales como caña de azúcar y yuca en gran volumen en regiones como el Valle del Cauca.¹¹ Esta expansión proviene de una serie de leyes de tierras que han sido recientemente aprobadas por el parlamento colombiano designadas a facilitar los intentos de las agroempresas de ampliar cultivos para la producción de biocombustibles. Las comunidades afrocolombianas estuvieron excluidas de este proceso y ahora enfrentan la violación de sus derechos de tierras y de su seguridad debido a la expansión de estas plantaciones.

Lo que ha impulsado el interés del presidente Uribe por expandir la industria de biocombustibles ha sido la mayor demanda a nivel internacional de fuentes renovables de energía, las cuales podrían cortar las emisiones de gases con efecto invernadero. Cosechas tales como caña de azúcar, maíz y palma pueden ser usadas en motores en lugar de petróleo y también para la producción de aceite de cocina y jabón.

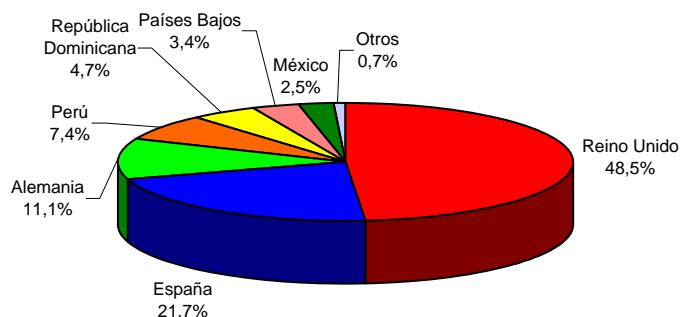
En junio de 2007, cuando el presidente Uribe se aproximaba al segundo término en su mandato, anunció que planeaba incrementar el cultivo colombiano de palma a 400,000 hectáreas.¹² Cultivado en Colombia desde los años 30, el aceite de palma, original de África, es uno de los principales cultivos usados en la producción de biocombustibles. Hoy en día existen unas 350,000 hectáreas de árboles productores de aceite de palma a lo largo de toda Colombia.¹³ En estos momentos el país lidera la producción de palma en América y es el quinto productor y exportador más grande de aceite de palma en el mundo¹⁴. Se informó que Nariño y Valle del Cauca presentaron una producción de aproximadamente 125,750 toneladas en 2005¹⁵.

Debido a la presión del gobierno colombiano para la expansión de la producción de biocombustibles, las agroempresas y agencias para el desarrollo han expresado interés en involucrarse en lo que es considerado por observadores internacionales como una industria lucrativa y buena para el medioambiente. El gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, en sus esfuerzos por erradicar las cosechas ilícitas en Colombia, ha apoyado financieramente la producción de cosechas alternativas a través del ADAM (Programa Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal) con fondos de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). Este programa comenzó en el año 2005, aparentemente “para

establecer un modelo exitoso, sostenible y participativo de desarrollo alternativo que genere oportunidades económicas, fortalezca los gobiernos locales y promueva una cultura de ‘cero cultivos ilícitos’ que mejore la calidad de vida de las poblaciones marginadas de la Colombia rural.”¹⁶. ADAM trabaja de cerca con la Agencia Presidencial para La Acción Social y La Cooperación Internacional y tiene proyectos en 12 departamentos, incluidos Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

El más grande mercado para el aceite de palma colombiano es la Unión Europea, que en 2005 representó el 85% de las exportaciones del país, teniendo como principal importador al Reino Unido¹⁷. Un 39% de los productos de aceite de palma exportados tienen como destino el Reino Unido, en donde, al igual que en otros países, el aceite de palma es usado en margarina, papas fritas de bolsa, pastelería, detergentes, jabones y pasta de dientes así como también es usado para reemplazar combustibles derivados del petróleo. Muchas marcas ampliamente conocidas usan aceite de palma en sus productos.¹⁸

Exportación de Aceite de Palma en Colombia



Fuente: Federación Nacional de Productores de Aceite de Palma

Biocombustibles y desplazamiento

Existe un emergente patrón de desplazamiento y violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas conectado con el cultivo de aceite de palma. Han sido denunciados numerosos casos de comunidades amenazadas y atacadas por grupos paramilitares. No mucho después que las comunidades se hayan desplazado, las grandes extensiones de tierra que anteriormente estaban repartidas en pequeñas parcelas son sustituidas por cultivos de palma. Las agroempresas internacionales han sido acusadas de ser cómplices de los grupos paramilitares y de usarlos como cuerpos de seguridad privada para obtener el control sobre estas áreas.¹⁹

Las plantaciones de palma han sido el escenario de combate, persecución y violencia armada por parte de todas las partes involucradas. Las guerrillas han asesinado y secuestrado a los propietarios y empleados de compañías productoras de aceite de palma y han dinamitado sus plantas de extracción. Las fuerzas armadas y grupos paramilitares se han convertido en cuerpos de seguridad privada que trabajan para los propietarios de compañías productoras de palma y han llevado a cabo muchas de las ejecuciones extrajudiciales reportadas en las áreas de producción de palma. Los miembros de la sociedad civil que han intentado desafiar la expansión de biocombustibles, tales como activistas sindicales de estas comunidades, han sido también perseguidos y amenazados, algunos de ellos asesinados o han ‘desaparecido’ en circunstancias misteriosas.²⁰

El departamento de Nariño ha sido escenario del aumento de violencia y desplazamiento forzado debido a la proliferación de biocombustibles. Algunos afirman que, desde octubre del 2007, nada menos que un 70% de la población de la cordillera occidental ha sido desplazada. Así como sucedió previamente con el cultivo de coca, grupos paramilitares han encontrado la manera de eludir las leyes que protegen los derechos a la tierra de indígenas y afrocolombianos y han falsificado documentos e identidades con el fin de ganar control sobre estos territorios y llevar a cabo desalojos forzados.²¹

La gran mayoría de afrocolombianos forzados a dejar sus tierras han terminado viviendo en ciudades como Buenaventura. Pese a abandonar sus tierras, no han logrado escapar de la violencia, como demuestran los siguientes incidentes.

En 2007, en Santa Cruz, población vecina de Buenaventura, personal paramilitar reunió a un grupo de jóvenes bajo el pretexto de organizar un partido de fútbol, asegurando que el equipo ganador recibiría 200,000 pesos. Los jóvenes, todos ellos con edades entre 15 y 22 años, fueron más tarde encontrados muertos, flotando en el río Estero las Vegas.

En Lleras Camargo, una de las áreas más violentas de Buenaventura, cuatro hombres abordaron un ómnibus que viajaba a través de la ciudad y dispararon indiscriminadamente a la multitud. Muchos murieron, incluyendo una mujer embarazada. Los hombres se bajaron del ómnibus y al siguiente día se reportó que el chofer era buscado por la policía, por los militares, paramilitares y las guerrillas. Fue finalmente capturado por la policía y encarcelado por tres semanas. Cuando fue liberado, las guerrillas le ofrecieron a él y a su familia protección a cambio de su asociación. El se negó y a los pocos meses, tras la captura de uno de los guerrilleros, el chófer de ómnibus comenzó a recibir amenazas de muerte y su casa fue saqueada. Sintiendo que su vida estaba en peligro, se vio forzado a dejar la región.²²

Desplazamiento en Colombia:

Con fecha enero 2008

No.	DESPLAZAMIENTO POR DEPARTAMENTO	TIPO DE DESPLAZAMIENTO		
		Individual	Masivo	General
1	ANTIOQUIA	250,145	133,227	383,372
2	BOLIVAR	181,741	36,906	218,647
3	MAGDALENA	111,745	36,120	147,865
4	CESAR	119,949	8,379	128,328
5	CAQUETÁ	113,799	8,173	121,972
6	CHOCÓ	59,057	56,763	115,820
7	TOLIMA	106,473	6,499	112,972
8	PUTUMAYO	96,846	10,305	107,151
9	VALLE DEL CAUCA	67,288	32,858	100,146
10	CAUCA	67,250	23,231	90,481
11	META	82,330	6,857	89,187
12	SUCRE	84,388	3,062	87,450
13	NORTE DE SANTANDER	68,207	16,671	84,878
14	CÓRDOBA	70,442	12,813	83,255
15	NARIÑO	54,264	26,618	80,882
16	SANTANDER	59,116	2,990	62,106
17	CALDAS	27,342	25,428	52,770
18	LA GUAJIRA	33,915	10,466	44,381
19	CUNDINAMARCA	37,096	5,495	42,591
20	ARAUCA	35,110	3,796	38,906
21	HUILA	36,079	1,131	37,210
22	GUAVIARE	28,460	2,410	30,870
23	UNDECLARED	29,125	1,096	30,221
24	CASANARE	17,696	3,453	21,149
25	RISARALDA	14,808	733	15,541
26	BOYACÁ	9,894	294	10,188
27	VICHADA	6,383	10	6,393
28	QUINDIO	4,220		4,220
29	ATLÁNTICO	3,694	28	3,722
30	VAUPÉS	2,428		2,428
31	BOGOTÁ, D.C.	2,309	28	2,337
32	GUAINÍA	1,769	50	1,819
33	AMAZONAS	573		573
34	ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	7		7
	TOTAL	1,883,948	475,890	2,359,838

Cocaína: el ciclo repetido

La carrera por conseguir tierras para la cosecha de cultivos de biocombustibles amenaza con asemejarse a otra causa importante de desplazamiento: el cultivo de cocaína. Durante dos décadas Colombia ha sido el mayor productor de cocaína y, en consecuencia, ha sido uno de los principales objetivos de los Estados Unidos en su 'lucha contra las drogas'. Pero a pesar de los billones de dólares empleados en programas contra-narcóticos, la producción de cocaína ha permanecido relativamente constante. Como resultado de la lucha por las tierras y el control del comercio de las drogas, existen unos tres millones de personas desplazadas internamente en Colombia.

Secuestros y ataques de la guerrilla, tomas de tierra por grupos paramilitares y planes gubernamentales orientados a la erradicación de cultivos ilícitos han dado como resultado que civiles hayan sido amenazados y forzados a dejar sus tierras. Ellos están atrapados en un ciclo de violencia y los desalojos forzados que han incrementado en los últimos años, están haciendo de ésta la peor crisis de desplazamiento después de África.

Los principales esfuerzos para erradicar la coca han sido llevados a cabo a través del programa Plan Colombia, iniciado en 1999 y apoyado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Desde entonces, billones de dólares han sido empleados en campañas de fumigación aérea destinadas a la destrucción de plantaciones de coca y al desalojo de las FARC de sus bases rebeldes. El gobierno del Reino Unido ha provisto también asistencia militar para estos propósitos.

Sin embargo, numerosas agencias que trabajan en el terreno, han notado que estas acciones, en vez de erradicar los cultivos, han servido para empujarlo a otras áreas. Además, agricultores pobres cuyas plantaciones han sido arruinadas por las sustancias químicas de las fumigaciones aéreas han comenzado a cultivar coca como medio de sobrevivencia. En el caso de las regiones del Pacífico, las fumigaciones han forzado la producción de coca en otras áreas que son controladas por paramilitares, como Nariño. A pesar de la disolución de algunos grupos paramilitares en años recientes, nuevas formaciones de grupos paramilitares controlan ahora la mayor parte de la producción de coca a través del país. Ellos usan las mismas tácticas brutales que sus predecesores para forzar a la gente a abandonar sus tierras, explotar sus recursos y expandir las plantaciones de coca.²³

Las comunidades afrocolombianas en Nariño se han quejado de cosechas arruinadas debido a las campañas fumigatorias y al acoso de las fuerzas locales. Luchas territoriales por las drogas entre paramilitares y grupos de guerrillas continúan amenazando su seguridad. Las

fuerzas de seguridad han sido también acusadas de ayudar a los paramilitares en la guerra contra las guerrillas con el propósito de ganar control sobre los recursos locales, ya sean plantaciones de coca, minas, plantaciones de palma y otras empresas con fines de lucro.

El cultivo de coca ha sido una vez más forzado dentro de las regiones vecinas –esta vez el Cauca y el Valle del Cauca, donde Palenque el Congal, contraparte de War on Want, está localizado. Además Palenque comentó que grandes plantaciones de productos para procesar biocombustibles tales como la palma han sido impuestos a los miembros de la organización.

Protegiendo a las comunidades afrocolombianas e indígenas

Para cubrir las necesidades básicas e inmediatas de la población desplazada, el Departamento de Administración activó una iniciativa para desarrollar el Plan Integral Unificado (PIU) para el Valle del Cauca en 2004. El marco de trabajo del PIU, desarrollado con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y la Organización Internacional para las Migraciones, consiste en programas favorables de prevención y protección de las poblaciones desplazadas, acción humanitaria, estabilización socioeconómica y fortalecimiento de las instituciones.

La realidad, sin embargo, es que la política del PIU, sus proyectos y programas han fracasado en ponerse en marcha debido a la falta de recursos necesarios para su implementación, provocada en parte por la falta de compromiso a este nivel por parte del gobierno.²⁴ Muchos afrocolombianos e indígenas, quienes han sido forzados a dejar sus tierras, ya sea debido a conflictos o para dar espacio al cultivo de biocombustibles, coca u otros cultivos, cuentan con muy poco apoyo inmediato o protección. El gobierno provee ayuda humanitaria básica en la forma de paquetes con comida, pero ésta dura muy poco. Los afrocolombianos no pueden conseguir viviendas subvencionadas ya que muchos no tienen cuentas bancarias y también porque son desplazados y forzados a entrar en el círculo vicioso de no poder acceder o pagar servicios básicos.²⁵ Además, sufren restricciones en su libertad de libre circulación debido a las cuotas que el gobierno impone para el uso de combustible, el cual es necesario para poder movilizar sus embarcaciones a través del río Yurumanguí. Supuestamente la libertad de libre circulación en estas comunidades del suroeste debiera ser garantizada por las fuerzas de seguridad, quienes en teoría deberían proteger a las comunidades, pero, como Palenque, contraparte de War on Want ha observado, lo que sucede es justamente lo contrario²⁶.

La Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993 dieron a las comunidades afrocolombianas derechos colectivos sobre las tierras de sus ancestros. La ley incluye provisiones respecto a mecanismos de desarrollo económico y social, protección de identidad cultural y derechos de los afrocolombianos a la educación étnica, servicios sociales, capacitación, salud y derechos humanos. Está diseñada para asegurar que las comunidades afrocolombianas sean consultadas a través de consejos comunales y participen en la planificación e implementación de proyectos de desarrollo en sus tierras comunales.

Las tierras ocupadas colectivamente bajo la Ley 70 no pueden legalmente ser vendidas en parte ni el territorio puede ser segmentado debido a intereses externos. Estas tierras son mantenidas en fondos colectivos que son administrados a través de los consejos comunales,

los cuales representan a las comunidades legalmente. A ellos se les asignan las tareas de administración, gobierno y la responsabilidad de tomar decisiones con respecto a los territorios y sus habitantes.²⁷ Estas comunidades han actuado unidas y han sido persistentes con el gobierno colombiano para que consulte y negocie con ellos el uso de las tierras bajo su jurisdicción. Sin embargo, a pesar del hecho de que una consulta previa es requerida por la ley, ésta no está siendo implementada.

En la práctica, los derechos de los afrocolombianos nunca fueron reconocidos en su totalidad. La legislación introducida bajo la administración Uribe socava aun más los derechos afrocolombianos, en tanto que la administración busca expandir sus proyectos de extracción de recursos a expensas de los derechos colectivos de las comunidades. La formulación e implementación de legislación, tal como la Ley Forestal y la Ley de Desarrollo Rural han excluido la representación de la comunidad afrocolombiana y ha buscado alentar la privatización y aislamiento de tierras que, por derecho, pertenecen a las comunidades afrocolombianas.

En respuesta, los consejos comunales regionales y los movimientos sociales nacionales están tomando estos asuntos en sus manos. Un ejemplo de ello es la erradicación voluntaria de cultivos de coca y palma en áreas donde la tierra ha sido expropiada ilegalmente. Palenque, así como otros movimientos sociales, ha decidido realizar una campaña activa en contra de los cultivos de coca y palma, sabiendo que ambos amenazan la estructura social y cultural de sus comunidades, así como también amenazan su capacidad de organización. En noviembre del año 2007, en el río Yurumanguí en Buenaventura, el Movimiento Comunidades Negras erradicó físicamente 25 hectáreas de coca en protesta.

Además, estos movimientos sociales han destacado el impacto negativo social y medioambiental de los cultivos de palma, los cuales contaminan la cadena alimenticia y suministro de agua a través de su extracción y el uso de herbicidas y fertilizantes químicos. A lo largo del río Yurumanguí, grupos similares a Palenque se han opuesto a la expansión del cultivo de palma debido a estas consecuencias negativas, y en el año 2007 escribieron una declaración que decía:

I. El gobierno está preparándose para aprobar una ley que le permitirá expropiar las tierras de propiedad colectiva para el uso de este tipo de cultivos destructivos. El gobierno permite fumigaciones, las cuales afectan la calidad nutritiva de la cosecha, multiplicando los problemas de salud, dificultando el acceso al agua no contaminada, lo cual se añade a la crisis general de comida que afecta a la población.

2. Tales acciones tienden a incrementar el conflicto armado, alentando la presencia de paramilitares. Hay, consecuentemente, mayor cantidad de desapariciones, masacres y desplazamiento de la población.
3. Estas medidas animan a agricultores que piensan del mismo modo a ejercer similares tipos de explotación en sus tierras, creando de este modo una cultura que es rápidamente asimilada por los nativos, aumentando así el déficit social y cultural que ya existe.
4. La prostitución se desarrolla en estas regiones, sumándose la propagación de enfermedades sexualmente transmitidas, incluido el SIDA/VIH y conduciendo a la pérdida de aquellos valores culturales que previamente limitaban tales efectos negativos.
5. La habilidad de las comunidades para organizarse políticamente es comprometida, disminuyendo la posibilidad de crear una Colombia de acuerdo a los sueños, costumbres y aspiraciones de su gente, y destruyendo todo sentido de identidad que puedan haber sido usados con fines sociales positivos.
6. El gobierno ha respondido a esta crítica ofreciendo la plantación de palma como un sustituto para la coca, infringiendo los acuerdos que previamente se establecieron con las comunidades locales.

Conclusión

Con el aumento del interés y la inversión internacional en biocombustibles, es probable que Colombia continúe aprovechando la oportunidad para incrementar su producción y exportación.

El Reino Unido, pese a ser uno de los mayores consumidores de productos colombianos de aceite de palma, permanece inconsciente del devastador impacto de este cultivo en las vidas de las comunidades indígenas y afrocolombianas. A pesar que el Gobierno británico reconoce en una investigación propia que el aumento del cultivo de palma en Colombia probablemente provocará más desplazados, apropiaciones de tierra, contaminación de ríos y destrucción de bosques²⁸.

El chocolate, margarina o jabón que vemos en los estantes de los supermercados, contienen aceite de palma con bastante probabilidad de provenir de un país donde miles de personas son forzadas a dejar sus tierras, inclusive algunas son brutalmente asesinadas para poder satisfacer la demanda internacional.²⁹ Es más, como la carrera para reducir el calentamiento global continúa, el gobierno británico y los inversores en la producción de biocombustibles deben reconocer que la tierra que pertenece a los indígenas y a los afrodescendientes no está a la venta y que un incremento en el cultivo de palma servirá sólo para incrementar la violencia y el desplazamiento en el suroeste de Colombia.

El movimiento Palenque el Congal, trabaja con comunidades afrocolombianas marginadas y afectadas por el conflicto interno, para mejorar el cumplimiento de sus derechos civiles, políticos, de tierras y culturales. Las iniciativas en favor de las comunidades facilitadas por Palenque conducen a tomar consciencia de derechos humanos básicos entre la población afrodescendiente. Palenque está tratando de reducir el número de comunidades desplazadas como resultado del conflicto armado en el Valle del Cauca: desarrollando la capacitación de las comunidades locales a través de la educación en resolución de conflictos y la toma de consciencia de sus derechos humanos; suministrando a las familias semillas y herramientas que permitirán a las comunidades cultivar sus alimentos y distribuirlos entre las familias más pobres; dando asistencia a través de la propagación de reportes publicados en reuniones públicas, intercediendo a nivel local, regional y nacional, y realizando campañas de concientización.

Incluidas en estas campañas están las marchas de protesta. El 31 de mayo del 2007, Palenque tomó parte en una manifestación que exigía la actuación de los organismos nacionales e internacionales para afrontar la pésima situación en la ciudad portuaria de Buenaventura. A

través de campañas constantes y proyectos sociales financiados por ONGs como War on Want, movimientos como Palenque continúan en la lucha a favor de los derechos de las comunidades afrocolombianas.

Se pide a todos los lectores que llamen la atención del gobierno del Reino Unido para que retire su apoyo militar al gobierno del Presidente Uribe escribiendo a Rt Hon David Miliband MP, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, (Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y de la Commonwealth), Foreign and Commonwealth Office, King Charles Street, London SW1A 2AH

Además, si usted quisiera apoyar el trabajo de War on Want con contrapartes como Palenque el Congal, puede realizar una donación enviando un cheque a War on Want, FREEPOST (esto es todo lo que necesita escribir en el sobre). War on Want tiene un compromiso a largo plazo con organizaciones locales trabajando en países en desarrollo. Si usted quisiera ayudarnos a continuar apoyando estos proyectos vitales, únase a nosotros haciéndose miembro hoy.

Notas

- ¹ Open letter from US organisations and concerned individuals to the Honourable Colombian Vice-President Francisco Santos, 11 de Abril 2007
- ² S Wilson, *SCP Evidence Base: Sustainable Commodities Case Study – Palm Oil*, Department for Environment, Food and Rural Affairs, Diciembre 2006
- ³ Ver el más reciente, S Milne, 'Anger at minister's photo with Colombian army unit linked to trade unionist killings', *The Guardian*, 11 de Febrero 2008; también, Mayday Colombia, War on Want, 2003
- ⁴ *World Directory of Minorities and Indigenous Peoples*, Minority Rights Group International; Global Rights work in Colombia, Global Rights Partners for Justice, 4 May 2005
- ⁵ *Supporting the Progress of Black Democratic Movements in the Promotion of their Human Rights*, Palenque el Congal, Diciembre 2007
- ⁶ C Pier, 'A pact with the devil', *Baltimore Sun*, 2 de Abril 2007; The 'Sixth Division': *Military-paramilitary Ties and US Policy in Colombia*, Human Rights Watch, Setiembre 2001
- ⁷ *Moving Forward with the ELN?*, International Crisis Group, 11 Octubre 2007
- ⁸ *Colombia's New Armed Groups*, International Crisis Group, 10 Mayo 2007
- ⁹ Open letter to members of US Congress travelling to Colombia and Panama in June 2007
- ¹⁰ *Supporting the Progress of Black Democratic Movements in the Promotion of their Human Rights*, Palenque el Congal, Diciembre 2007
- ¹¹ G H Rey, 'Harvesting sunshine for biofuels', *International Press Service*, 12 Octubre 2007
- ¹² O Balch y R Carroll, 'Massacres and paramilitary land seizures behind the biofuels revolution', *The Guardian*, 5 Junio 2007
- ¹³ Colombia Ministry of Agriculture and Rural Development projections for 2007 and 2008
- ¹⁴ *Biofuels*, Pro-Export Colombia
- ¹⁵ F Mignorance, *A Flow of Palm Oil, A Study from a Human Rights Perspective*, Human Rights Everywhere for Coordination Belge pour la Colombie, Noviembre 2006
- ¹⁶ *Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal – ADAM* <http://www.adam.org.co/who.html>
- ¹⁷ *Desempeño del sector palmero colombiano en 2005*, Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
- ¹⁸ S Wilson, *SCP Evidence Base: Sustainable Commodities Case Study – Palm Oil*, Department for Environment, Food and Rural Affairs, Diciembre 2006
- ¹⁹ Ver T Allen-Mills, 'Biofuel gangs kill for green profits', *Sunday Times*, 3 Junio 2007; O Balch y R Carroll, 'Massacres and paramilitary land seizures behind the biofuels revolution', *The Guardian*, 5 Junio 2007; *A Flow of Palm Oil*, F Mignorance, Noviembre 2006
- ²⁰ *A Flow of Palm Oil*, F Mignorance, Noviembre 2006
- ²¹ T Allen-Mills, 'Biofuel gangs kill for green profits', *Sunday Times*, 3 Junio 2007; Report to US foreign policy aides by United States Office on Colombia, Washington office on Latin America and Latin America working group education fund, 12 Setiembre 2007
- ²² *Supporting the Progress of Black Democratic Movements in the Promotion of their Human Rights*, Palenque el Congal, Diciembre 2007
- ²³ *Colombia's New Armed Group*, International Crisis Group, 10 Mayo 2007
- ²⁴ *Gobernación del Valle del Cauca 2007*, Plan Integral Unico Departamental; *Rule of Law?*, Justice for Colombia, May 2006; *Displaced and Discarded*, Human Rights Watch, Octubre 2005
- ²⁵ *Rule of Law?* Justice for Colombia, May 2006
- ²⁶ *Supporting the Progress of Black Democratic Movements in the Promotion of their Human Rights*, Palenque el Congal, Diciembre 2007
- ²⁷ Colombia's Law 70: In Recognition of the Right of Black Colombians to Collectively Own and Occupy their Ancestral Lands, passed in 1993
- ²⁸ S Wilson, *SCP Evidence Base: Sustainable Commodities Case Study – Palm Oil*, Department for Environment, Food and Rural Affairs, Diciembre 2006

Publicado en mayo de 2008

Escrito por Gemma Houldey y basado en investigación de la organización Palenque el Congal y Christopher Moye.

Traducido por Marcela Valdivia.

War on Want

Development House

56-64 Leonard Street

London EC2A 4LT, Reino Unido

Tel: +44 (0)20 7549 0555

Fax: +44 (0)20 7549 0556

Correo electrónico: mailroom@waronwant.org

www.waronwant.org

War onWant

War onWant lucha contra la pobreza en los países en desarrollo en unión y solidaridad con las personas afectadas por la globalización.

Realizamos campañas pro derechos humanos, sobre todo a favor de los derechos de los trabajadores, y contra las causas fundamentales de la pobreza, desigualdad e injusticia globales

